

Universidad de Los Andes
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina

**ESTUDIO DE LA CRISIS DE LOS PARTIDOS POLITICOS EN
VENEZUELA DESDE 1988 AL 2008 Y EL SURGIMIENTO DE
NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES COMO FORMA DE
PARTICIPACION DEMOCRATICCA MAS ALLA DE LOS PARTIDOS**

Autor: Licenciado Guerra Boscán Alexis Andrés

Magister Scientiae en Ciencias Políticas

2009

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I

CRISIS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.

1.1.- Cuestionamiento al concepto de partido político.

1.1.1.- El partido y la representatividad.

1.1.2.- Evolución social y partido político.

1.2.- La pérdida de confianza en los partidos políticos venezolanos.

1.2.1.- Partido único, viejos partidos y partidos nuevos.

1.3.- Democracia participativa, el nuevo reto.

CAPÍTULO II

LOS NUEVOS ACTORES SOCIALES.

2.1.- Ciudadanía y nuevos canales de expresión.

2.1.2.- Surgen alternativas a la falta de representatividad en Venezuela

2.2.- Un nuevo actor masivo, los medios de comunicación

2.3.- La Iglesia ante el Estado

2.4.- El movimiento estudiantil como actor político

2.4.- Los consejos comunales como vía para llegar al Estado

CAPÍTULO III

PERSPECTIVAS DE LA DEMOCRACIA VENEZOLANA

3.1.- Ética y partidos políticos

3.2.- ¿Qué le espera a los partidos políticos?

3.3.- Los nuevos actores políticos y su influencia en la democracia
venezolana

CONCLUSIÓN

ANEXOS

BIBLIOGRAFÍA

Índice de tablas

- 1.- Confianza en los partidos políticos en América (2007)
- 2.- Confianza en las instituciones en América (2007)
- 3.- Resultados de las elecciones parlamentarias (1988-1998)
- 4.- Gobernaciones obtenidas por partidos (1989-2004)
- 5.- Votos validos por organización política en elecciones para gobernadores (1988-1998)
- 6.- Abstención electoral elecciones nacionales (1958-1998)

Resumen

La crisis de los partidos políticos en Venezuela y el posterior posicionamiento del gobierno de Hugo Chávez, con su proyecto socialista, condujeron a un gran sector de la sociedad civil venezolana a buscar nuevos canales de expresión para sus demandas. Un bipartidismo debilitado y nuevos partidos, carentes de fuerza para encarar el “bolivarianismo”, llevaron a la población a volcar su confianza en actores sociales, que por fuerza han debido asumir el papel de actores políticos. Actualmente, los medios de comunicación, la Iglesia Católica y el movimiento estudiantil, cuentan con más respaldo que los mismos partidos políticos.

Se precisa, entonces, para que la democracia venezolana retome su rumbo y se consolide como un sistema funcional, que sus actores primordiales, como son los partidos políticos, se ganen la voluntad de los ciudadanos, pero para ello, es necesario que estas organizaciones transiten el camino de la ética, ya que el mayor cuestionamiento que se les hace es la carencia de valores de sus miembros. Así, estos actores sociales, convertidos en actores políticos, volverán a sus funciones y la democracia contará con instituciones que ejerzan la vital función de la representatividad de los ciudadanos.

Introducción

La actual situación política venezolana, si bien causa duras confrontaciones en algunos y, posiblemente, incertidumbre en otros, presenta un interesante panorama de estudio, pues es, sin duda, un período de transformaciones que va más allá de los enfrentamientos entre oficialismo y oposición.

El llamado puntofijismo, que dio pie a la dominación bipartidista en el país, comenzó a decaer a raíz de las dificultades económicas y la incapacidad de los gobiernos de AD y COPEI para satisfacer demandas de la población. A partir del “Caracazo”, en 1989, se acentúa el descrédito de estas organizaciones que se refleja en altos índices de abstención. La llegada al poder de Hugo Chávez significó también el retorno y fortalecimiento de la izquierda, que devino en el cuestionamiento a la democracia representativa y a los partidos políticos. En esta situación, la sociedad civil no ha encontrado las instituciones intermediadoras ante el Estado, lo que ha llevado a que actores sociales se conviertan en actores de la política venezolana.

Por considerar este tema de gran interés por su actualidad y porque la democracia también debe fortalecerse por medio de las investigaciones que

contribuyan a esclarecer el camino más adecuado a seguir, se ha considerado pertinente analizar las funciones que ejecutan estos actores sociales, principalmente los medios de comunicación, la Iglesia Católica y el movimiento estudiantil; pues en la actualidad están teniendo una notable influencia en la política nacional, e incluso pueden ser determinantes en el futuro. El objetivo principal en la investigación es determinar si estos nuevos actores políticos tendrán tanta influencia como para marcar un nuevo rumbo político en el país y si serán capaces de suplantarse a los partidos como elementos fundamentales de la democracia venezolana.

La investigación plantea, entonces la siguiente hipótesis: Si la sociedad civil venezolana no consigue canales de expresión para sus demandas en los partidos políticos, entonces estas organizaciones serán desplazadas por otras instituciones que se convertirán así en actores políticos circunstanciales.

Para estudiar esta situación y llegar a resultados que permitan dar un aporte al estudio de la política, se utilizará la investigación documental, evaluando los antecedentes de este problema y las apreciaciones que sobre este tema han realizado otros investigadores. El propósito de la investigación también apunta a contribuir con el estudio sobre estos nuevos actores políticos y, principalmente, sobre la política venezolana.

CAPÍTULO I

Crisis de los partidos políticos

La situación de los partidos políticos en Venezuela, y que en varios países latinoamericanos tiene sus semejanzas, se ha estudiado y ha estado en la opinión pública desde hace muchos años. El llamado bipartidismo (Acción Democrática y COPEI), que gobernó el país desde 1959 hasta la llegada de Hugo Chávez al poder, se hizo merecedor de las debilidades de la democracia venezolana, y aún hoy en día se le señala como responsable de la actual crisis política por no haber respondido a las expectativas ciudadanas.

Ahora bien, esta situación no es exclusiva de Venezuela, se repite en casi toda Latinoamérica y ha ocurrido y ocurre en otros continentes. Como lo señala Lechner (1996) “en la época reciente estamos registrando el cuestionamiento del Estado y de la política como instancias generales de representación y coordinación de la sociedad”, en clara referencia a las instituciones que han tenido en sus manos la representación ciudadana, como son los partidos políticos y cuya función ha quedado en entredicho.

Distintos investigadores han profundizado en estos estudios. Maurice Duverger, Ramón García Cotarelo, Klaus Von Beyme, Juan Carlos González y Alfredo Ramos Jiménez han realizado interesantes estudios sobre esta mala hora que enfrentan los partidos políticos. Todos coinciden en que hay un agotamiento, un cansancio de la política y que esta situación se produce por la desconexión y cierta desvinculación entre los partidos, la sociedad y la opinión pública, muy desfavorable hacia estas instituciones. (Rivas Leone, 2002)

Una muestra de este problema se refleja en los índices de abstención a la hora de votar. Según Gurutz Jáuregui (1994), el aumento considerable de los índices y niveles de abstención electoral expresa el descontento y cuestionamiento de las organizaciones partidistas, no tanto de la organización en sí como de su forma de hacer política.

Este planteamiento apunta a la función que deben desempeñar estas organizaciones y los resultados que han producido, en el sentido de que si no hay una aprobación de los ciudadanos a su labor es porque no han cubierto sus expectativas, vale decir que los niveles de abstención y

los cuestionamientos que se hacen a los partidos políticos se deben a que han sido ineficientes en el desempeño de sus funciones.

De acuerdo con César Cansino y Ángel Sermeño (1997), nuestras jóvenes democracias están desarrollando en la actualidad patrones diferentes e irregulares (ineficiencia estatal, despolitización y apatía política, reducción de la democracia a su dimensión electoral en presencia de sistemas de partidos débiles y en franco declive) con respecto a lo que está normalmente asociado a las democracias consolidadas, estables, fuertemente institucionalizadas.

El descontento hacia los partidos ha afectado a los sistemas democráticos latinoamericanos, que desde los años 80 acentuó la inestabilidad política, con cuestionamientos fuertes, protestas y la búsqueda de alternativas a los partidos tradicionales y que se pensaba eran el reflejo de democracias consolidadas.

Desde Perú, con la elección de Alberto Fujimori y su reelección, a pesar del impacto del llamado “Fujimorazo”, que acabó por un tiempo con los poderes legislativo y judicial, pasando por Bolivia y las frecuentes destituciones de sus presidentes, la llegada al poder de figuras

como Menem, en Argentina; el fin del partido Colorado en Paraguay o de la hegemonía del PRI, en México hasta el descalabro del bipartidismo en Venezuela, hay evidencias de que la población del continente quiere y espera resultados distintos y que está dispuesta a borrar del mapa electoral a estas instituciones si no trabajan por los ciudadanos.

El caso es que hay una distorsión y que se cuestiona la corrupción, la burocracia, el caudillismo y sobre todo, el incumplimiento en la función de producir mayor bienestar para la población. En este sentido, se puede decir que “la crisis actual del Estado de partidos democráticos se manifiesta como un complejo sistema de transformaciones funcionales y orgánicas que afectan sobre todo a los actores públicos esenciales del sistema, es decir, a los partidos políticos y su clase política”. (González, 1997:33)

Al no encontrar respuesta en los partidos, la sociedad civil comenzó una búsqueda de alternativas a las ya tradicionales. Podría decirse que este descontento produjo una fractura que dio origen a la antipolítica, que apuntó a los outsiders como la opción para cubrir el vacío y darle esperanzas a una sociedad que se ponía de espaldas a estas instituciones. “La creciente reducción en los niveles de participación

electoral y el auge de candidatos ‘nuevos’ deben ser interpretados como indicadores de una pérdida de confianza en los políticos tradicionales y por ende una situación de desencanto político”. (Nolte, 1995: 159)

De esta forma, la antipolítica se presentó como la nueva política, en el sentido de proponer y perseguir transformaciones y cambios en las formas tradicionales de hacer política, lo cual implica el cuestionamiento de dichas formas, que tienen como fundamento la presencia protagónica de los partidos políticos.

Frente a esto, Danilo Zolo (1994) ha sostenido expresamente que actualmente la política no sólo pierde su lugar central, sino que la informalización deja a la política extrañamente “fuera de lugar”, en todos lados. De tal modo que dicha situación ha coincidido con un clima de desarraigo, desorientación, apatía y confusión de lo político.

Este panorama que, con algunas variaciones, comenzó a hacerse más grave para los partidos políticos a partir de la década de los 80, tuvo un giro más acentuado con las nuevas figuras y nuevos sistemas de gobierno. Con Hugo Chávez en Venezuela; Evo Morales, en Bolivia; Rafael Correa, en Ecuador; Daniel Ortega, en Nicaragua; Fernando

Lugo, en Paraguay; el triunfo del Frente Farabundo Martí, en El Salvador y las tendencias más hacia la izquierda de los gobiernos de Lula da Silva, en Brasil y Cristina Kirchner, en Argentina, expresan a las claras que grandes sectores de la población de las naciones latinoamericanas exigen un cambio acentuado en la vieja forma de hacer política y que están dispuestos a quemar en la hoguera a las instituciones tradicionales y optar por alternativas políticas, en la búsqueda de resultados satisfactorios a sus exigencias, lo cual no quiere decir que hasta los momentos esta situación dé signos de un encaminamiento que represente avances sustanciales, más allá de las propuestas y de la retórica que las acompaña.

1.1.- Cuestionamiento al concepto de partido político

Es tema sobradamente discutido el concepto de partido político, desde los clásicos hasta los más actuales investigadores de la ciencia política. Sin embargo, una definición exacta y perdurable en el tiempo tiene sus complicaciones, como lo dice el mismo Giovanni Sartori.

Norberto Bobbio (1981), en su Diccionario de Política, afirma que dar una definición de partidos políticos no es simple, porque este fenómeno se ha presentado y se presenta con características notablemente diferentes, tanto desde el punto de vista de las actividades concretas, que ha desarrollado en lugares y tiempos distintos, como en términos de estructuración organizativa que él mismo ha asumido y asume. El politólogo italiano recurre también a la famosa definición de Weber: El partido es una asociación (...) dirigida a un fin deliberado, ya sea éste un objetivo, como la realización de un programa que tiene finalidades materiales o ideales o personales, es decir, tendiente a obtener beneficios, poder y honor para los jefes y secuaces o si no, tendiente a todos estos fines conjuntamente.

Aún así, podría decirse que los partidos políticos son creados con el fin de contribuir, de una forma democrática, a la determinación de la política en un país y a la formación y orientación de la voluntad de los ciudadanos, así como a promover su participación en las instituciones representativas mediante la formulación de programas, la presentación y apoyo de candidatos en las correspondientes elecciones, y la realización de cualquier otra actividad necesaria para el cumplimiento de sus fines. Su principal tendencia es durar y consolidarse, y su finalidad última y legítima es obtener el poder mediante el apoyo popular manifestado en las urnas.

Diferentes autores coinciden en esta posición. José Ramón García Cotarelo y Juan Luis Paniagua Soto (1987) señalan que los partidos políticos son los principales actores políticos de las sociedades contemporáneas. Pablo Oñate (1997) manifiesta que los partidos son instituciones fundamentales para el desarrollo del sistema democrático contemporáneo. Angelo Panebianco (1990) y Giovanni Sartori (1997) también comparten este parecer.

Con base en estos mismos autores y en la mayoría de los estudiosos de la Ciencia Política, podría decirse que las principales funciones que desarrollan los partidos políticos en los sistemas democráticos son; a) legitimar el sistema político, b) canalizar y armonizar los intereses y las demandas de los ciudadanos, c) representar a los ciudadanos y, d) conseguir y ejercer el poder político.

Al respecto, G. Almond y B. Powell (1972) y Giovanni Sartori (1997), señalan que la principal función de los partidos políticos es la de canalizar los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, Albert O. Hirschman (1970) y Pablo Oñate (1997) afirman que lo primordial para los partidos es la de servir de mediación y comunicación entre el Estado y la sociedad.

Ahora bien, el cuestionamiento que se hace a los partidos políticos, aspecto implícito en su concepto y en sus funciones, es que la acción que generalmente cumplen, por encima de la que más interesa a los ciudadanos es la de alcanzar el poder político y ejercerlo por medio de sus miembros y cuadros, dejando a un lado otras funciones. Un gran número de autores comparten también esta afirmación, L. Epstein (1967), J. Schumpeter (1968), Maurice Duverger (1981), Klaus Von

Beyme (1986) Emilio Lamo de Espinosa (1996) Jordi Matas (1996) M. Weber (2000), Otto Kirchheimer (2001) o Manuel Alcántara.

Duverger (1981) dice que un partido es una comunidad con una estructura particular, cuyo objetivo es conquistar el poder y ejercerlo. Sartori (1997) los define como cualquier grupo político que se presenta a elecciones y que puede colocar, mediante ellas, a sus candidatos en los cargos públicos. Weber, Coleman y Rosberg señalan como central la conquista del poder. Destacan que los partidos son formas de socialización que, descansando en un reclutamiento (formalmente) libre, tienen por objetivo proporcionar poder a sus dirigentes dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas probabilidades ideales o materiales (la realización de bienes objetivos o el logro de ventajas personales o ambas cosas). Sánchez Agesta (1954) dice que por partidos políticos deben entenderse aquellos grupos societarios y secundarios cuyo fin inmediato es la posesión y el ejercicio del poder político.

En fin, son muchos los autores que definen al partido político como una organización que pretende alcanzar el poder y ejercerlo con

sus cuadros y dirigentes y además procuran mantenerlo y, en la medida de lo posible, aumentarlo. Este aspecto, tan propio de estas organizaciones, y de acuerdo con investigadores y estudios de opinión entre la ciudadanía, está por encima de la función de canalizar las demandas o solicitudes que tienen que ver con mejores servicios públicos, atención a sus necesidades y a una calidad de vida cada vez mejor.

Obviamente, este desplazamiento de lo que más interesa a los ciudadanos ha producido, en los actuales sistemas democráticos, un creciente distanciamiento entre los partidos políticos y los ciudadanos, y se está generando una progresiva desconfianza y apatía de los ciudadanos hacia estas organizaciones y al papel que ellos desempeñan en el sistema. Este distanciamiento entre los partidos y la sociedad ha producido inactividad y desafección política y ha desembocado en una desconfianza generalizada de la sociedad civil hacia las instituciones democráticas.

Esta situación entorpece el funcionamiento de las instituciones y dificulta el funcionamiento de los sistemas democráticos en muchos

países. Por ello, los partidos políticos son percibidos por la sociedad como organizaciones burocráticas y centralizadas que no fomentan la participación, que se caracterizan por su la falta de democracia interna y por el grado de burocratización y de centralización que tienen. Los ciudadanos demandan una reflexión profunda de los políticos y una redefinición de las funciones que desempeñan los partidos en los sistemas democráticos. Ésta es una manera de que no se rompa el vínculo, necesario en todo sistema democrático entre sociedad, partidos políticos y Estado.

Otro de los factores que ayuda a entender este distanciamiento entre los partidos políticos y los ciudadanos está en el dominio que estas organizaciones ejercen en todos los ámbitos de la sociedad. Ostrogorski (1979), con una concepción crítica sobre los partidos, plantea que los partidos políticos son un instrumento de dominación de la élite política, que utiliza programas ómnibus, es decir, programas universales que nunca se cumplen.

Los partidos políticos se convierten, de este modo, en máquinas electorales cuyo primordial objetivo es conseguir el mayor número de

votos para rentabilizarlos en la conversión de espacios de poder político en las instituciones democráticas, por lo cual no es extraño, entonces, que no gocen de la confianza ni de la aprobación de los ciudadanos. De acuerdo con el Latinobarómetro, si bien el 56% de la población latinoamericana apoya la democracia, apenas un 37,1% se siente satisfecha con la manera cómo funciona. (Ver anexos 1 y 2).

Por otro lado, Nolte (1995) señala que la creciente reducción en los niveles de participación electoral y el auge de candidatos nuevos deben ser interpretados como indicadores de una pérdida de confianza en los políticos tradicionales y por ende una situación de desencanto político.

Retornando a Bobbio (1984), cuando se refiere a que el partido político se presenta con características notablemente diferentes, tanto desde el punto de vista de las actividades concretas, que ha desarrollado en lugares y tiempos distintos, habría que relacionar esta afirmación con la situación actual de estas organizaciones, destacando que la evolución y transformación experimentadas por los partidos políticos no ha ido siempre acorde con las necesidades y las demandas de los ciudadanos.

De allí surge la necesidad de una revisión de las actividades que desarrollan los partidos, que deben adaptarse a las nuevas situaciones y a las exigencias ciudadanas, que van más allá de la actual práctica de conseguir el poder para beneficios muy particulares. Esta situación de inconformidad con estas organizaciones, que parte de la propia sociedad civil, tendrá repercusión en la futura conformación del sistema de partidos de Venezuela. (1)

(1) Para un estudio más detallado de la realidad de los partidos en América Latina, ver: Ramos Jiménez, Alfredo, "Los partidos políticos latinoamericanos. Un estudio comparativo", Mérida, Cipcom, 2001.

1.1.1.- El partido y la representatividad

En la democracia representativa el pueblo delega la soberanía en autoridades elegidas de forma periódica mediante elecciones libres. Estas autoridades, en teoría, deben actuar en representación de los intereses de la ciudadanía que los elige para representarlos. En este sistema, los representantes normalmente están organizados en partidos políticos, y son elegidos por la ciudadanía. La voluntad del pueblo debe ser la base de la autoridad del gobierno; la cual debe expresarse a través de elecciones periódicas y legítimas basadas en el sufragio universal mediante el voto secreto y libre.

Para Bobbio la democracia representativa “...significa genéricamente que las deliberaciones colectivas, es decir, las deliberaciones que atañen a la colectividad entera, no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas para ese fin”. (Bobbio, 1984: 36)

Todo lo anterior es lo que debería ser, el aspecto teórico, lo ideal. En la práctica, los representantes de los ciudadanos se rigen, muchas veces, por intereses distintos. Así, al momento de legislar o de participar en la

toma de decisiones públicas, el representante no siempre sirve de manera correcta a los intereses de sus representados, pues sus lealtades están divididas entre su partido político y sus valores e ideales personales, con lo cual queda establecido que el partido político, el medio por el cual esta representación se ejerce en el llamado sistema democrático, es un factor determinante y hasta prioritario en las decisiones de gobierno, muchas veces, por encima de los ciudadanos.

Bobbio (1984) considera que en las democracias representativas, el representante debe gozar de la confianza del cuerpo electoral puesto que ya no es responsable frente a sus electores, porque debe velar por los intereses generales de la sociedad y no de los particulares.

Este punto, tocado por el investigador italiano, es uno de los aspectos fundamentales en la actual crisis de partidos y en las continuas diatribas surgidas en las volátiles democracias latinoamericanas, que se debaten en decidir si es conveniente para la sociedad el sistema representativo o, más bien, y como se ha querido ver en la política venezolana, debe acudirse a la democracia participativa, como un mecanismo más efectivo para velar por los intereses ciudadanos.

Hay tres aspectos que deben señalarse en lo atinente a la representatividad y los partidos políticos. El primero tiene que ver con la ruptura del vínculo de éstos con la sociedad, que se traduce en la dificultad de los partidos políticos para agregar y articular los intereses sociales, en vista de que sus prioridades están en otro lugar. El segundo está referido al desempeño en el cargo de quienes han sido investidos de la representación. Desde este ángulo la representación política remite a la relación partido-gobierno y comporta un problema de ejercicio del poder de decisión. Visto a partir de esta segunda modalidad, el malestar se plantea cuando las decisiones que adoptan los representantes en el marco de ese ejercicio gestionan deficientemente los intereses sociales que les han sido confiados.

Para completar esta visión de la relación partido-gobierno, desde el ángulo de la idea de representación, otro elemento debe ser incluido: la proliferación de escándalos de corrupción que involucraron a miembros de la clase política. A los ojos de los ciudadanos, la deshonestidad en el ejercicio de la función pública se combina con el mal desempeño en las cuestiones económicas y sociales. Todas estas circunstancias generaron otra fuente de mala opinión hacia los partidos,

que se ha reflejado en la apatía política, tal como se revela en las encuestas de Latinobarómetro. (Ver anexo 2).

Este comportamiento choca con la visión de James Madison (1994), quien en El Federalista afirma que las instituciones representativas son lugares de representación de personas, no de intereses. Sin embargo, las habilidades de los políticos se han utilizado, no para hacer frente a los problemas de sus representados, sino para transformarse en la capacidad para trepar en beneficio de su propio éxito, de allí que la opinión que se tenga de los políticos y de los partidos, es deficiente en, prácticamente, toda Latinoamérica, pues la sociedad civil sigue a la espera de que se cumpla la “promesa democrática”.

Esta carencia de representatividad o las distorsiones que se producen a la hora de tomar decisiones dentro de los espacios de gobierno han afectado, fuertemente a la democracia y, sobre todo a los partidos políticos. Tal como expresa Rivas Leone, “el agotamiento y declive de la forma partido se produce desde el momento en que al interior de dichas organizaciones se produce un deterioro, por no decir abandono, de la función pedagógica y representativa, dándose así una

desconexión y cierta desvinculación entre los partidos, la sociedad y la propia opinión pública”. (Rivas Leone, 2002:3)

Este punto es, obviamente, otro clavo más en el ataúd de los partidos, principalmente los tradicionales, que siguen estancados en una concepción de la política como una fuente de poder y de beneficios particulares y no como la toma de decisiones a favor de un colectivo, tal como debería ser y como lo exige la sociedad civil.

Este reclamo a los partidos y a sus viejas prácticas se ha puesto bajo estudio y se ha expuesto a la opinión pública desde hace varios años. Alfredo Ramos Jiménez (1999) ha señalado que se está produciendo una transformación de la política y la presencia de una nueva cultura política, donde la política como instancia privilegiada de representación y coordinación de la vida social se ha vuelto problemática, y donde la política como instancia común tiende a desvanecerse.

Son, precisamente, estos cuestionamientos a esta cultura política, los que han llevado a esta misma sociedad a hacer exigencias a las

instancias políticas y a reclamar cambios de rumbo, que en varios países latinoamericanos se han concretado con gobernantes surgidos fuera de las organizaciones tradicionales. Ello no implica, en todo caso, que las decisiones sean o no acertadas, pero sí demuestran que los ciudadanos, los votantes, no quieren seguir bajo sistemas que no los representan y que no son capaces de satisfacer sus demandas.

1.1.2.- Evolución social y partido político

Según la idea desarrollada por el catedrático norteamericano, Larry Greiner (1998), las organizaciones están sometidas constantemente a procesos de cambio; lo que varía son las formas de ese cambio, ubicando las mismas en dos categorías: cambios por revolución y cambios por evolución.

Así, la vida de las organizaciones, situación a la que no escapan los partidos políticos y las instituciones de gobierno, se puede describir como un proceso sucesivo de cambio por revolución y cambio por evolución. En el primero caso, las estructuras organizativas son incapaces de responder a los nuevos retos, porque expresan una resistencia interna a las nuevas realidades y exigencias, debiéndose crear estructuras distintas (partidos nuevos) o recrear las anteriores para poder adaptarse al nuevo estado de cosas. En el segundo caso, las instituciones se adelantan a las nuevas realidades y exigencias de sus demandantes y conviven perfectamente, dado que estas personas (ciudadanos o votantes en el caso de los partidos políticos) observan que estas instituciones cumplen sus expectativas.

Ahora bien, ¿qué ha pasado con los partidos políticos en Latinoamérica, y específicamente en Venezuela?

Partiendo del caso Fujimori, en Perú, y repasando la vida política del continente, desde México con la caída del PRI, hasta el resurgir de la izquierda en Venezuela, Bolivia y otros tantos países, obviamente la situación que se observa es que los partidos fueron incapaces de responder a las exigencias ciudadanas, a los nuevos retos y se optó por optar por alternativas diferentes. Es un nuevo clivaje que se transforma en expresión de una nueva sociedad que busca también nuevas formas de hacer política, con partidos y gobiernos mucho más efectivos en los resultados que al ciudadano le interesan, y en los que se ha fallado insistentemente, o como lo señala Rosario Espinal, se ha incumplido en “atender las necesidades socioeconómicas de las grandes mayorías mediante una cierta redistribución de las riquezas”. (Espinal, 1995: 7) Los partidos políticos, como actores principales, han sufrido las consecuencias y “han sido afectados por las transformaciones sociales y económicas que han producido un cambio por lo menos en cuanto a la composición de los diversos sectores sociales”. (Rivas Leone, 2002: 7)

Pero a la promesa incumplida se añaden otros factores que impulsan las transformaciones, o como dice Greiner, “los cambios por revolución” de las instituciones. Los cambios en la sociedad traen consigo medios masivos de comunicación, información amplia y constante, modelos de sociedades en el mundo. Es un reaprendizaje permanente que afecta la visión de la vida y la conducta de las personas, pues “ahora la política es cuestión de comunicaciones masivas”. (Bisbal, 2003:125) Esta globalización de la comunicación ha creado una nueva conciencia en los ciudadanos, que ahora conocen más sobre sus derechos y son más exigentes, especialmente frente al Estado y a la función de las instituciones. Hay una mayor disposición y mejores herramientas para reclamar los espacios de la sociedad civil y de sus ciudadanos a las instituciones públicas. Jordi Borja (2002), quien ha realizado estudios sobre los derechos de los individuos en España y Latinoamérica, afirma que la ciudadanía es un proceso de conquista permanente de derechos formales y de exigencia de políticas públicas para hacerlos efectivos, y que los derechos han evolucionado y progresado a lo largo del tiempo.

Es, precisamente, esta exigencia desde los ciudadanos, esta presión de parte de la sociedad civil, la que conlleva a que deban producirse las transformaciones en los partidos políticos y en las instituciones públicas para que puedan cumplir con lo que se les exige, pues aunque ha habido cambios, los requerimientos son mayores. Es cierto que los partidos políticos han evolucionado y su presencia se ha ido generalizando en la mayoría de los Estados, pero esta evolución y transformación no ha ido siempre acorde con las necesidades y las demandas de los ciudadanos. El entorno donde deben desenvolverse los partidos no parece dispuesto a estabilizarse, sino, por el contrario, está en permanente transformismo, aumentando, como señala Panebianco (1990), la incertidumbre que experimentan los partidos, dispersando con ello el poder de decisión de los mismos y creando importantes divergencias sobre los asuntos políticos.

Ahora, el hecho de que los partidos estén rezagados frente a su colectivo, no significa, necesariamente, que deban ser desplazados, pues frente a ellos está el reto del cambio. Norberto Bobbio (1984) llama transformaciones en lugar de crisis a los cambios profundos que, de tiempo en tiempo, es sometido en su proceso de evolución el sistema

democrático. La democracia es dinámica. Podrían llamarse situaciones coyunturales o etapas de cambio de la democracia, que llevarán a nuevas situaciones si se adaptan a los nuevos tiempos; pues, de lo contrario, y como ha venido sucediendo, surgirán organizaciones que abarcarán el espacio político y que, dependiendo de sus resultados, se harán permanentes o no.

Ya, desde los años 80, en Latinoamérica la política ha asomado nuevos rostros, principalmente los outsiders nacidos de este inconformismo con las organizaciones tradicionales. Partidos políticos que se creían sólidos, como AD y COPEI, en Venezuela; El PRI mexicano; Acción Democrática Nacionalista, de Bolivia; El Partido Social Cristiano y el Rodolista, de Ecuador, y hasta los mismos Liberal y Conservador, de Colombia, han perdido su capital político ante las nuevas situaciones, mientras que las nuevas figuras, como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Álvaro Uribe, se han mantenido con un amplio respaldo popular. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en casi todos estos países el surgimiento de candidatos outsiders y el impacto de éstos en la nueva política y en la democracia ha coincidido con una situación de crisis económica, de crisis de gobernabilidad y de

cuestionamiento de las élites política, en las cuales el avance de la llamada antipolítico, como nueva política o modalidad, coincide con la apatía política de parte de los ciudadanos.

Retornando al planteamiento de Greiner, estas recientes figuras políticas y las organizaciones que los respaldan podrían sufrir la misma suerte de los partidos tradicionales, si no caminan de la mano de los cambios sociales y con los planteamientos de la sociedad civil. De ello se desprenden dos opciones, o el cambio por evolución, que actualiza a los partidos políticos con las transformaciones sociales o el cambio por revolución, que es la corriente del modernismo que arrastra a estas organizaciones y las obliga a cambiar, pues de lo contrario mueren en la obsolescencia y son superadas por nuevos partidos. Alfredo Ramos Jiménez (1991), en su estudio sobre los partidos políticos latinoamericanos, destaca que dentro de las tres revoluciones latinoamericanas se pueden distinguir cuatro grandes contradicciones que han polarizado la producción de conflictos: Dos de estas contradicciones hunden sus raíces en la estructura de la producción socioeconómica y las dos restantes en la estructura sociocultural, en la cultura política. Con ello, hace ver que estos elementos, tan

fundamentales para los ciudadanos, alimentarían las principales líneas de conflicto y fracturas sociales, dando origen a nuevos partidos.

1.2.- La pérdida de confianza en los partidos políticos venezolanos

Los planteamientos realizados en páginas anteriores, sobre la incapacidad de los partidos políticos para canalizar las demandas de la sociedad civil, las carencias a la hora de ejercer la representatividad de los ciudadanos, aunado a la corrupción, y la falta de actualización respecto a las transformaciones sociales, han afectado el sistema de partidos en Venezuela y llevaron al otrora sólido bipartidismo de AD y COPEI a posiciones de rezago a la hora de contar los votos.

Hasta 1988 ambos partidos obtenían más del 80% de los sufragios para presidente y más del 70% para el Congreso. Estos dos partidos crecieron desmesuradamente, hasta llegar a ser, respectivamente, el partido socialdemócrata y el partido democratacristiano más grandes del mundo, en términos proporcionales. Las elecciones de 1988 fueron, en términos numéricos, la apoteosis del bipartidismo venezolano. Los candidatos presidenciales de ambos partidos sumaron la cifra récord del 94 %. (Ver anexos 3 y 4)

A partir de 1989 se observan indicios de que algo comenzaba a cambiar, ya que los partidos que tradicionalmente habían dominado el panorama electoral (AD y COPEI) fueron derrotados en los estados de Bolívar (gana La Causa R) y Aragua (gana el MAS). Las elecciones de 1993 suponen un punto de inflexión: se pasa de un bipartidismo atenuado a un multipartidismo limitado e inestable. Rafael Caldera, fundador y durante largos años líder de COPEI, gana las elecciones como independiente, apoyado por Convergencia Nacional (una organización nueva conformada por disidentes de COPEI), el MAS y una cantidad de pequeños partidos. En 1998, Chávez, un militar retirado, autor de la intentona golpista de 1992, llega a la presidencia. En tanto, diversas organizaciones de sondeos, constataron la siguiente realidad durante la década pasada: “Los partidos políticos eran las más débiles, desprestigiadas y prescindibles de las instituciones públicas”. (Fernández, 2002: 128)

Al respecto, Alfredo Ramos Jiménez cita: “En sus reflexiones sobre la Venezuela de Chávez, Teodoro Petkoff (2000) ha observado el hecho de que en la esfera meramente política, no se puede negar que han sido desplazados los viejos partidos y que están reducidos a la nada -más

que por la propia fuerza de Chávez, por su propia degeneración, porque se suicidaron. A lo largo de los últimos 20 años perdieron todo contacto con la realidad, se hicieron autistas y en cuanto apareció un agente catalítico que pudo precipitar lo que en la mente de los venezolanos estaba bullendo, ese vengador fue ungido por el pueblo como Presidente”.

En las elecciones presidenciales del 2000, Hugo Chávez obtuvo el 48,11% de la votación, contra el 37,52% de Francisco Arias Cárdenas, quien fue apoyado por La Causa R y otras organizaciones minoritarias y el 2,72% de Claudio Fermín. AD y COPEI no postularon candidatos en esta contienda electoral. Ese año, AD únicamente ganó dos gobernaciones y COPEI una, y en las municipales, AD alcanzó el 21,4% y COPEI apenas el 9,2%. En el antiguo Congreso, ambas agrupaciones ganaron 95 escaños, mientras que el MVR se alzaba con 192 puestos.

En los comicios del 2004 la situación empeoró. AD obtuvo una sola gobernación y COPEI desapareció en el resultado final y, en las presidenciales del 2006, AD ni siquiera respaldó al candidato opositor a

Chávez, Manuel Rosales, lo que sí hizo COPEI, que le aportó apenas el 2,24% de los sufragios.

Los números son el reflejo de la percepción que los ciudadanos tienen sobre estos dos partidos, tanto por su desempeño como por la corrupción de sus miembros. En el año 2000, una encuesta realizada en Caracas por la firma Datastrategia, conjuntamente con la Universidad Católica Andrés Bello, mostró gráficamente la opinión que se tenía para ese entonces sobre los políticos, especialmente de los dos partidos tradicionales, COPEI y AD: El 43% afirmó que “todos los adecos y copeyanos son corruptos”.

Como se observa, en el 2006, cuando se realizó la última elección presidencial, la opinión de los venezolanos sobre estos dos partidos no cambió, según el respaldo que mostraron los votantes. Este mal momento para la democracia venezolana ha seguido. Una encuesta realizada por Datanalisis, en agosto de 2008, revela que apenas el 22% dice identificarse con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y otras organizaciones oficialistas, mientras que un magro 12% lo hace con los partidos de oposición. Esto a pesar de estar en un período

preelectoral, en el que comenzaba a ascender la curva de quienes se identifican con los partidos políticos.

El desencanto es persistente, tanto por los viejos partidos, como por las nuevas opciones, como el caso del PSUV. Ello se debe, de acuerdo a las investigaciones realizadas, a que los partidos venezolanos son meros centros de propósitos políticos, por encima de las aspiraciones ciudadanas, pues “los partidos políticos –de derecha, centro e izquierda– actuaron siempre más como instituciones del sistema político y del Estado que de la sociedad civil”. (Rivas Leone 2003:32)

Esta crisis de los partidos en Venezuela no se constituyó de un momento a otro. La misma tiene sus bases en el deterioro paulatino pero constante de los partidos tradicionales a la hora de cumplir con sus funciones y responsabilidades ante la sociedad. Los venezolanos demostraban constantemente que ya no tenían en buena opinión a las viejas organizaciones, entre otras cosas porque los mismos no cumplieron con los requisitos que la gente espera de un partido político.

Lo cierto del caso es que parte de los trastornos que se observan en el funcionamiento de la democracia venezolana se debe a que los partidos abandonaron sus funciones, que, de acuerdo con Maurice Duverger (1981), deben ser las que competen a organizaciones sociales y políticas o como comunidades que tienen espacios de articulación y proyección de la movilización y la lucha social, y que son instrumentos de elaboración y difusión de ideas, de valores, de proyectos de sociedad.

Los debates sobre la pertinencia de los partidos políticos venezolanos, de su capacidad para responder a las exigencias de la sociedad venezolana actual, pueden ser consecuencia de que éstos no han sido capaces de crear las respuestas idóneas a los retos que el sistema les ha planteado, por lo que podría afirmarse que el problema de los partidos venezolanos es que no han logrado superar los recientes estadios de cambio por evolución de sus organizaciones o, dicho de otra manera, persisten en sus viejas prácticas, cuando la sociedad les reclama eficiencia política y de gestión de gobierno. Esta insatisfacción o descontento con los gobiernos se ha traducido en desconfianza en los partidos políticos, cuando estos, en su conjunto, frustran las expectativas de los electores.

Señala Gianfranco Pasquino (1997) que un régimen como el democrático, justamente por ser democrático es vulnerable. Cuando muchos son los protagonistas, muchas las estructuras, muchos los procesos que deben actuar y ser democráticos, su sintonía no siempre es fácil y su armonía no se da jamás por descontado. Siendo así, tendríamos que en la democracia es siempre posible que alguna cosa no vaya por el camino indicado.

La democracia venezolana ha sido afectada por esta vulnerabilidad, principalmente por la debilidad de los partidos, de allí que en este momento se exijan cambios. Es necesario, para utilizar la expresión de Stambouli (2002), encontrar de nuevo en Venezuela “la política extraviada”, es decir, el conjunto de sistemas de interacción social que alberguen el diálogo, la crítica, el intercambio de opiniones y la posibilidad de articular y defender los diferentes intereses.

1.2.1.- Partido único, viejos partidos y partidos nuevos.

Thaís Maingón (2002) ha precisado que la crisis de representatividad del sistema de partidos trajo, como consecuencia, el surgimiento de otras organizaciones y movimientos políticos que fueron llenando los espacios otrora ocupados por los dos partidos tradicionales. Y así ha sucedido. AD y COPEI son ahora partidos de segunda, detrás de nuevas organizaciones como Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, por el lado de la oposición y, por el oficialismo, el PSUV, junto con el partido Patria Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV).

Cambió absolutamente el panorama político nacional y las viejas organizaciones, estancadas en su visión cerrada del manejo partidista fueron desplazadas, lo que no indica que los nuevos partidos sean más o menos democráticos, pero sí apuntan a que hay una exigencia de la población y un propósito de que la política de Venezuela mejore. Lo sucedido es la consecuencia de una situación que terminó por expresar a una sociedad civil cansada de partidos que, como ya se señaló, no cumplían con sus funciones dentro de la democracia. “Al hacer un

escrutinio del panorama político venezolano, se revela la variedad de salidas a una situación de disconformismo: la transferencia del apoyo de un partido a otro de la constelación partidaria existente, el realineamiento de las preferencias en favor de nuevos partidos, el abandono de las lealtades partidarias para ofrecer el apoyo, caso por caso, desde una posición de electorado independiente, y, finalmente, el encuadramiento detrás de líderes antipartido, cuestionadores de la democracia representativa”. (Hagopian, 1990: 34)

Ocurrió, entonces, que nuevos actores y organizaciones recién creadas aprovecharon la coyuntura del vacío dejado por el bipartidismo e irrumpieron como alternativas para una sociedad carente de liderazgos y de representatividad. A ello se sumó la modificación en la Constitución, que llevó, a partir de 1989, a los partidos venezolanos a un proceso de selección de candidatos a gobernadores y alcaldes y a la exigencia de participar en elecciones regionales, con estructuras que estaban sometidas a un estricto control central, pues estaban hechas para participar en elecciones de alcance nacional. De ello resultó que líderes y partidos regionales comenzaron a tener importante presencia nacional; estructuras paralelas a los partidos nacionales en distintas regiones,

producto de divisiones “locales” o de líderes de partidos nacionales con fuerte ascendencia regional; partidos aliados en unas regiones y enfrentados en otras. De buenas a primeras, la toma de decisiones y la distribución de poder en las organizaciones partidistas se vio afectada por las dinámicas de las regiones específicas y por los resultados electorales que se producían, ya no a nivel nacional, sino en cada estado del país.

El primer producto de este cambio de reglas fue el triunfo de Rafael Caldera en las elecciones de 1993, quien fue apoyado por una nueva organización, llamada Convergencia y por pequeños partidos que se agruparon en el llamado “chiripero”. Ese mismo año, Andrés Velásquez y el partido Causa R, desde el estado Bolívar, tiene una alta figuración en los comicios. También en esas elecciones Irene Sáez, quien había sido alcaldesa del municipio Chacao, estuvo entre las opciones a la presidencia de la República. Posteriormente, Henrique Salas Römer, con Proyecto Venezuela, aparece en las presidenciales de 1998. En el 2000, otro ex gobernador, Francisco Arias Cárdenas, compite como opción contra Hugo Chávez y, en el 2006, Manuel Rosales, quien estaba al frente del Ejecutivo del estado Zulia, se lanza a la presidencia del país.

Son, en definitiva, liderazgos, o intentos de liderazgos, que surgidos de las regiones procuran ocupar la política nacional. De todo este sacudón, quedan dos partidos que buscan aglutinar las preferencias de los ciudadanos venezolanos. Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, que en las elecciones de 2006 aportaron entre ambos el 66,5% del total de votos obtenidos por Manuel Rosales, y que en las elecciones de alcaldes y gobernadores del 23 de noviembre de 2008 tienen una buena cantidad de candidatos y aparecen, además, en los espacios de opinión pública, como los principales partidos opuestos al liderazgo del presidente Hugo Chávez y al naciente PSUV.

Las pretensiones de consolidar un liderazgo de estas dos organizaciones todavía no se vislumbran, máxime cuando una encuesta realizada por Datanalysis y publicada en el diario Notitarde el 3 de septiembre de 2008, revela que un 50% de los votantes para las elecciones del 23 de noviembre de 2008 se declaró “Ni-ni”, es decir, no definían una inclinación partidista y, por el contrario, prefirieron mantenerse al margen o aparte de cualquier partido.

De esto se desprenden dos razones que son trabas para que estas organizaciones crezcan, aparte del liderazgo que ha mantenido el presidente Hugo Chávez y que ha manejado muy bien el rechazo a los partidos políticos a través de los medios de comunicación. La primera es que al menguarse el poder de AD y COPEI se perdió la centralización de poder nacional de los partidos políticos venezolanos. Rivas Leone señala que éste fue “uno de los efectos generados por el proceso de descentralización que afectó notablemente a los partidos como un todo, fortaleciendo los llamados liderazgos locales o regionales, introduciendo nuevos actores políticos y dinámicas que debilitaron la concepción y organización tradicional del partido político como un todo y como una estructura nacional”. (Rivas Leone, 2006: 48-57)

De la misma opinión es el politólogo Michael Penfold-Becerra, quien afirma que “el movimiento hacia la descentralización del Estado conllevaría necesariamente una disminución de la discrecionalidad de las cúpulas partidistas. Al disminuir la centralización, disminuía la discrecionalidad de las direcciones nacionales de los partidos políticos”. (Penfold-Becerra, 2000: 14-15)

Este proceso de descentralización, junto con la crisis de representación del bipartidismo, fueron, por lo tanto, determinantes en la transformación de la política venezolana, con representantes locales y regionales de los partidos que van a tener la función de coordinar y moderar las expectativas de los ciudadanos. Esto conllevó a “la nueva conformación de las estructuras políticas e institucionales, así como la división de los poderes en los partidos políticos y en las instituciones del Estado”. (Lalander, 2002:209) El politólogo Axel Hadenius (2001), asevera que el proceso de descentralización venezolano contribuyó a la ruptura de la vieja tradición político monopolista.

El otro factor que alimenta la mala opinión en estos nuevos partidos y que mantienen un gran porcentaje de electores entre los “Ni-ni”, es que persiste la desconfianza entre los venezolanos hacia las instituciones políticas, tal como lo revela el estudio de opinión realizado por Datanalisis en 2008, y que señala que los partidos apenas cuentan con un 30% de respaldo, mientras que otras instituciones, como la Iglesia o los medios de comunicación gozan de más del 70% de confianza entre la población.

Esta desconfianza deriva de las viejas prácticas del bipartidismo adeco-copeyano, pero que además los nuevos partidos carecen de un liderazgo fuerte, tanto a nivel local como a nivel nacional. Esto, en buena parte, se debe a que “la nueva clase dirigente resultante de las elecciones de 1998 y comicios siguientes compuesta por gobernadores, diputados, alcaldes y demás, salvo honrosas excepciones no parece estar conformada por políticos capaces y eficientes, necesarios para ejercer el control y dirección del Estado, ni mucho menos para revalorizar las funciones que le son encomendadas como actores principales de la democracia, en otras palabras, no han cumplido el rol y funciones básicas que le corresponde a toda estructura de gobierno, viciando aún más el sistema democrático”. (Rivas Leone, 2006:56)

Esta situación no ocurre en el oficialismo, ya que el liderazgo del presidente Chávez ha arropado a las otras organizaciones de izquierda, hasta plantearse la conformación del partido único, o el PSUV. Necesario es hacer la aclaratoria de que el término “partido único” está referido a una sola organización que aglutine a los factores políticos que comulgan con el proyecto político del mandatario venezolano y no a un partido único para el sistema democrático. De tal manera que la

democracia venezolana no entraría dentro de la clasificación de “partido totalitario” ni de “partido hegemónico”, elaborada por Sartori, pues persiste en el sistema, aunque con problemas, una base de competitividad por los puestos políticos en procesos de elección. No obstante, hay que destacar el problema de la relación entre el Estado y el PSUV, ya que muchos miembros del gobierno, incluido el Presidente, ocupan cargos directivos en el partido y realizan funciones políticas, de tal manera que mal puede el PSUV ejercer la representación de la sociedad civil. En este sentido, puede señalarse que esta situación apuntaría, más bien, a una “democracia restringida”, que reserva la forma de hacer política a decisiones gubernamentales. (Ramos Jiménez, 2008)

Asimismo, puede señalarse que la conformación de un partido único de izquierda en Venezuela enfrenta otros problemas, que sobrepasan incluso la polarización izquierda-derecha que se presenta en el país. Uno de ellos es que el PSUV está fundamentado en el liderazgo del presidente Chávez. Este aspecto tiene sus ventajas. El tipo de liderazgo que posee un partido puede ser vital para su éxito, ya que son los líderes quienes están más visibles frente al público votante y, según

Michels (1972), fijan la política y el programa para el partido y toman las decisiones importantes. Sin embargo, la alta popularidad del Chávez y su hegemonía en la organización, pondrían dudas sobre un relevo político dentro del PSUV y atentarían contra la durabilidad misma de la organización, o como bien lo señala Ramos Jiménez (2008), al referirse a organizaciones estrechamente vinculadas a su líder, estos partidos carecen de uno de los requisitos esenciales de todo partido: La permanencia, que les permite sobrepasar la vida política y física de sus fundadores.

Otros dos factores atentan contra la conformación de un partido único: En primer lugar, la naturaleza del propio proyecto revolucionario, que irrumpe precisamente en contra de la concepción de partido que dominó la política venezolana por casi cuarenta años, y que trata de establecer una forma de organización política apoyada en el trípode pueblo-líder-Fuerza Armada; en segundo lugar, la naturaleza heterogénea de la coalición política con la que llega el presidente Chávez al poder.

Este último aspecto es determinante y, en el caso del PSUV, existen componentes ideológicos diversos, que son los que proceden del pensamiento de la izquierda tradicional y los de la visión militarista de la política (Pereira, 2004). Ello configura un piso de realización para comportamientos hegemónicos, con lo cual peligraría la estabilidad debido a los efectos impredecibles de tal situación en los grupos excluidos o minimizados políticamente, como el caso del partido Podemos, que abandonó la alianza con el PSUV alegando razones ideológicas y de identidad con el proyecto político. Pero además, esta situación también se vio reflejada en la designación de candidatos a gobernaciones y alcaldías para las elecciones del 23 de noviembre de 2008 por otros partidos de la “Alianza”, desacatando la línea del PSUV, sobresaliendo el caso del partido Patria para Todos (PPT), que tuvo candidatos propios en seis estados del país.

De tal manera que no puede asegurarse que el PSUV, al igual que UNT y Primero Justicia, logren consolidarse o institucionalizarse como partidos dentro de la democracia venezolana, dada las carencias que, hasta ahora, presentan en sus estructuras.

1.3.- Democracia participativa, el nuevo reto.

Como se ha mencionado insistentemente, los partidos políticos han sido desplazados de su origen como formadores de opinión, paralelamente a la desideologización de la política y al constante debilitamiento de su vínculo con la ciudadanía, además han sido afectados por las transformaciones sociales y económicas que han producido cambios en la composición de los sectores sociales.

Las funciones de socialización, movilización, participación y legitimación, que eran propias de los partidos políticos, se fueron agotando, trayendo consigo una deslegitimación creciente que ha conllevado a una crisis de gobernabilidad en la medida que los partidos políticos dejaron de formar y crear ciudadanía. Aunado a ello, el deterioro de su funcionamiento, la falta de relevo generacional en sus estructuras, la incapacidad de canalizar las demandas y expectativas de una sociedad que exige mejores niveles de vida y la pragmatización de la actividad política, ha acabado por erosionar a estas instancias formales de participación política. Esta realidad ha sido contraria al concepto de la democracia, entendida ésta como “el conjunto de reglas

procesales para la toma de decisiones colectivas en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados”. (Bobbio, 1984:14)

En este sentido, la democracia, tanto en Venezuela como en muchos países latinoamericanos, ha quedado reducida a la competencia por el liderazgo, en la cual los líderes se constituyen en el nuevo eje del proceso político, y en la que los representados, salvo cuando tienen la posibilidad de votar, no cuentan con otra instancia de participación.

De este inconformismo surgió, como una alternativa a la democracia representativa, que en teoría predominó en Venezuela, la propuesta de avanzar hacia la democracia participativa, modelo expuesto y defendido por el presidente Hugo Chávez.

Esta democracia participativa, en palabras de Bobbio (1984) se produce cuando un individuo participa en primera persona en las deliberaciones que le atañen. Bobbio aclara que entre los individuos deliberantes y la deliberación que lo involucra no haya ningún intermediario. En tanto Macpherson (1991) dice que la democracia

participativa puede ser calificada como un sistema piramidal, con la democracia directa en la base y la democracia delegada en los niveles por encima de ella.

De estas definiciones se desprende entonces que la democracia participativa es un proceso de consulta, de decisión o control de los ciudadanos ante las políticas públicas, y que supone la información, consulta, control e incluso decisión de la comunidad, de manera directa, sobre aspectos de la toma de decisiones de gobierno. “La participación supone necesariamente la interacción entre el Estado y la sociedad, interacción por la cual la sociedad civil penetra en el Estado. Así, la participación ciudadana tiene dos dimensiones: a) es un medio de socialización de la política; b) es una forma de ampliar el campo de lo público hacia esferas de la sociedad civil y por ende de fortalecer a ésta”. (Cunnil, 1991:25)

Desde los antiguos griegos hasta Rousseau, se pensaba la democracia como democracia directa, en la cual los ciudadanos ejercen el derecho a la participación en la toma de decisiones sin intermediación. La democracia se asocia desde entonces con soberanía popular, voluntad

general e interés común. Esta concepción tradicional de la democracia se articula en torno al protagonismo central del pueblo concebido como soberano, como un todo homogéneo y capaz de producir una voluntad colectiva. Los protagonistas de este tipo de democracias son los sujetos, capaces de identificar aquello que constituye el bien común. Pero estas concepciones fueron elaboradas para sociedades simples y apenas industrializadas, de allí que la democracia participativa tenga, en estos tiempos, sus detractores, dada su inviabilidad en sociedades de decenas de miles, incluso millones de habitantes, tal como exponen algunos investigadores. Al respecto, Michels (1972) afirma que en el partido democrático moderno es imposible que la colectividad emprenda la solución directa de todas las controversias que puedan surgir, haciéndose obligatoria alguna instancia de representación.

El mismo Sartori (2003) expone que entre una experiencia democrática en pequeño y una experiencia democrática en grande hay un abismo, pues no se puede esperar de la democracia a gran escala, lo que se obtiene de la democracia en pequeña escala. Con ello el pensador italiano sustenta las razones que hacen difícil la aplicación de una democracia participativa en su concepción simple, con ciudadanos

tomando directamente las decisiones que implican un gobierno de multitudes.

En el caso venezolano, el argumento principal que se asume contra la propuesta del presidente Chávez es que se intenta sustituir la mediación partidista entre el Estado y la sociedad por una relación personalista directa entre el pueblo y el líder. (Rivas Leone, 2006). Esta situación ha dado origen a dos visiones distintas y muy radicales de la política venezolana por parte de los partidos políticos, lo que ha conllevado a que una verdadera propuesta de mejorar el sistema democrático del país se haga difícilmente viable, ante las descalificaciones que surgen de los dos bandos.

Algunos autores defienden la democracia representativa y, considerando las deficiencias de este modelo, que se soporta en la mediación de los partidos políticos, apelan más bien a una redefinición de las funciones de estas organizaciones para darle un matiz participativo al sistema de democracia representativa de Venezuela, que actualmente enfrenta duros cuestionamientos. La democracia participativa debe descansar en la fortaleza de la sociedad civil, la que promovida por el

Estado, pero independiente de éste, se constituye a sí misma para mejorar sus condiciones. (Huerta y Pacheco, 1996)

La democracia representativa en Venezuela se enfrenta así a este dilema: o los gobernantes y partidos políticos representan real y verdaderamente la voluntad de los electores, y entonces la democracia representativa se acerca más a las ventajas de la democracia directa, o los gobernantes y partidos políticos no representan tal voluntad, y entonces la democracia debe enfrentar las situaciones de inconformidad de parte de los ciudadanos, que deben buscar otros mecanismos de representación de sus intereses. Traducido a los términos que articulan el mejor funcionamiento posible, no el perfecto, de la democracia en Venezuela, este dilema plantea que gobernantes y partidos se esfuercen realmente y obtengan mejoras sustanciales en los sistemas de representación de la voluntad de los electores en sus expresiones como mayoría y como minoría y, sobre todo, como equilibrio entre mayorías y minorías, para acercarse así a los aspectos positivos actualmente realizables del concepto de democracia directa. En caso contrario, de no hacer este esfuerzo real (no sólo declarativo) y de no obtener resultados sustanciales (no sólo publicitarios), gobernantes y partidos se alejan de la

voluntad de los electores y la democracia se hace incapaz de viabilizar los intereses de éstos, dando lugar a otras formas de representación, con serias repercusiones sobre el funcionamiento del sistema político. (Martín, 2008)

Capítulo II

2.- Los nuevos actores sociales

Los antecedentes en el continente americano de los nuevos actores sociales pueden buscarse en los primeros movimientos de reclamo social que se gestaron en los años sesenta. El movimiento de los hippies, el rechazo a la guerra de Vietnam, los movimientos feministas y los reclamos por la preservación del ambiente llevaron a conformar los primeros grupos que hacen exigencias directas al Estado para que modifique sus leyes y acciones sobre estos aspectos. La constitución de estos movimientos, sus acciones e irradiación hacia Latinoamérica, gestaron inicialmente, por su incidencia y acciones llamativas, lo que se dio en llamar nuevos actores sociales.

Ahora bien, el punto central de esta investigación es la incidencia de estas organizaciones en el espacio político, de tal manera que se dejarán de lado algunos aspectos para ubicar su desarrollo como alternativas de expresión de la sociedad civil ante el Estado, debido a que los canales regulares en una democracia, como lo son los partidos políticos han incumplido su función, tal como lo señala Alfredo Ramos

Jiménez: La crisis actual del Estado de partidos democráticos se manifiesta como un complejo sistema de transformaciones funcionales y orgánicas que afectan sobre todo a los actores públicos esenciales del sistema, es decir, a los partidos políticos y su clase política. (Ramos Jiménez, 1997)

Los investigadores de la Ciencia Política coinciden en ubicar a los nuevos actores sociales en la esfera de la sociedad civil, definida ésta como el espacio donde se desarrollan los conflictos sociales que el Estado tiene la misión de encarar. En este espacio coinciden variados y diversos conflictos que surgen de las relaciones de los grupos, los movimientos, las asociaciones, las organizaciones que derivan de ellas, y a los cuales se suman los grupos de interés, las asociaciones de diverso tipo con fines sociales e indirectamente políticos, los movimientos de emancipación de grupos étnicos, de defensa de los derechos civiles, de liberación de la mujer, los movimientos juveniles, etcétera. (Bobbio, 1994)

Dado que en la sociedad civil ocupa el lugar reservado para la formación de las demandas que se dirigen al sistema político (Bobbio, 1994), los nuevos actores sociales se convirtieron en un medio de

contacto entre los ciudadanos y el Estado, luego que estos grupos se consolidaron y alcanzaron un mayor peso, a fin de lograr demandas de interés para la población. La acción de estos movimientos se comenzó a sentir con mayor fuerza a partir de los años setenta, ya que coincidía su consolidación con una cada vez mayor deficiencia de los organismos políticos para satisfacer las exigencias ciudadanas; entonces, junto con las formas tradicionales de participación en las democracias latinoamericanas fueron apareciendo estas nuevas formas o canales de expresión de los intereses ciudadanos. Algunas tesis también apuntan y destacan la sustitución progresiva de las funciones que desarrollan los partidos políticos en los sistemas democráticos y la asunción de estas funciones por los nuevos actores sociales.

Este cambio o transformación de la actividad política, como ya se mencionó, tiene un impulso sostenido en la falta de representatividad, debido a que los mecanismos tradicionales de participación en la democracia representativa fueron desbordados por las nuevas demandas de participación que se plantean, de allí que se haya conformado como alternativa de representación la que ahora asumen estas asociaciones.

“Nuevos actores sociales, organizaciones no gubernamentales, bajo el genérico de sociedad civil han hecho acto de presencia en la escena política, emplazando y confrontando liderazgos tradicionales y asumiendo la dirección de diversas acciones contestatarias contra el conocido sistema establecido, pero también en la defensa de éste”.
(<http://www.iisg.nl/labouragain/documents/romero.pdf>.)

Entonces, el planteamiento que se presenta es que ante las carencias mostradas por los partidos políticos, los nuevos actores sociales, devenidos en actores políticos, ocupan el espacio de estas organizaciones, debido a que cuentan con mayor respaldo por parte de los ciudadanos. En el caso venezolano, por ejemplo, los medios de comunicación y la Iglesia Católica tienen una gran influencia en la política, al punto de que el mismo presidente Chávez los ha denominado “partidos políticos”. Una encuesta de Datanalisis en 2005 señalaba que la Iglesia Católica cuenta con un 78,7% de confianza y los medios de comunicación gozaban de un 70% de respaldo de la población; mientras que los partidos políticos, apenas contaban con un 30% de confianza.

En todo caso, esto no es un indicativo de que los partidos puedan ser desplazados del sistema democrático, al menos hasta ahora; pues en algunos casos, estas organizaciones podrían adaptarse ante la nueva realidad que se les presenta. José Ramón Montero y Richard Gunther (2002) señalan que estos nuevos desafíos en ningún caso han llevado a la desaparición de los partidos o a su reemplazo por otro tipo de organizaciones (como los grupos de interés o los movimientos sociales) o prácticas institucionalizadas (como las de la democracia directa).

Hay que señalar, asimismo, que el fortalecimiento de estos nuevos actores políticos también va ligado al agravamiento de la situación económica en Latinoamérica, consecuencia igualmente de ineficiencia política. Es, en todo caso, una respuesta a la crisis del Estado, la cual puede ser entendida a partir de estas dos restricciones: la económica, que exige la eficiencia de los servicios sociales que el Estado presta o financia; y la política, que requiere decisiones tomadas en el ámbito democrático (Navarrete, 2001). Algunos investigadores asocian los problemas socioeconómicos con la aplicación de las políticas neoliberales que se impusieron en el continente en los años 90, y que tuvieron fuerte reacción en la sociedad civil y en los movimientos

sociales que ya para la época había ocupado un amplio espacio en la sociedad. (Martín, 1999)

Todo esto derivó en una mayor inconformidad de parte de la población, que expresó su desvinculación a los partidos políticos y los hizo responsables del agravamiento de su situación. Esta visión se fue convirtiendo en un sentido común compartido por amplios sectores de la población, y sus efectos se perciben en la caída de la adhesión a los partidos políticos, en el esfuerzo de los nuevos liderazgos por ser percibidos como independientes y no ligados a las instituciones del sistema, en el refuerzo del rol de actores e instituciones no políticas como las ONGs, la Iglesia y las Fuerzas Armadas, en el éxito de las opciones antipartidistas en las elecciones recientes, y finalmente en los intentos por refundar el sistema político con nuevas instituciones que completen y hagan definitivo el desplazamiento de las viejas élites. (Fernández, 2002).

No está claro si estas emergentes agrupaciones puedan reducir aún más la acción de los partidos políticos, sobre todo porque las nuevas organizaciones políticas no tienen la fortaleza de sus antecesores (como

AD y COPEI, en Venezuela; el PRI mexicano o el APRA, de Perú), pero sí tienen mayor presencia en el debate ante las instituciones del Estado y actualmente mantienen una buena aceptación en la sociedad civil.

2.1.- Ciudadanía y nuevos canales de expresión

El concepto de ciudadanía, acerca del cual muchos investigadores coinciden en que es dinámico, está estrechamente relacionado con los deberes y derechos del individuo y en su relación con el Estado. La ciudadanía se refiere a esta conciencia de pertenencia, es decir, al status de miembro de una determinada comunidad política, con derechos y deberes definidos. El sociólogo británico T. H. Marshall (1950) en este mismo sentido agrega que dichos deberes y derechos son iguales entre los miembros de dicha comunidad.

Lafer (1994), en su reflexión a partir del pensamiento de Hannah Arendt, señala que la ciudadanía es el derecho a tener derechos, porque la igualdad de los seres humanos en dignidad y en derechos no es algo dado: es una construcción de la convivencia colectiva, que requiere el acceso al espacio público. Ese acceso al espacio público permite la construcción de un mundo común a través del proceso de afirmación de los derechos humanos. Entretanto, el investigador francés Alain Touraine expresa que en la modernidad pueden distinguirse dos conceptos de ciudadanía: La primera está relacionada con el espíritu

republicano, con la sociedad política de la libertad y la igualdad, el ciudadano es miembro de un estado nacional, es el artífice de la soberanía popular que otorga legitimidad a ese Estado. La otra idea de ciudadanía afirma los derechos del individuo, no como miembro de una comunidad política, sino como hombre, con el sentido de universalidad que le otorga a este concepto la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Estos derechos de los ciudadanos se debaten en el campo político, y éstos expresan sus peticiones y reclamos a través de los canales existentes para tales fines; por lo tanto, la actividad política es fundamental porque habilita a los ciudadanos para ejercer y desarrollar su capacidad de juicio político. “La ciudadanía es el derecho a tener derechos, porque la igualdad de los seres humanos en dignidad y en derechos no es algo dado: es una construcción de la convivencia colectiva, que requiere el acceso al espacio público. Ese acceso al espacio público permite la construcción de un mundo común a través del proceso de afirmación de los derechos humanos”. (Jelin, 1997:189) Ser ciudadano o ciudadana significa para esta autora dos cosas: una, poseer

un sentimiento de pertenencia a una comunidad política; otra, obtener un reconocimiento de esa comunidad política a la que se pertenece.

Esta relación entre ciudadanos y Estado tiene sus dificultades cuando los primeros no son atendidos por el segundo, y cuando los canales de expresión, que deben estar ligados a la ciudadanía, aparecen como apéndices de los organismos de gobierno o crean alianzas basadas en intereses particulares que atentan contra los miembros de una comunidad o contra los derechos ciudadanos. Habrá ciudadanía sólo en la medida en que las instituciones puedan garantizar a todos, como parte de los derechos individuales, todos los derechos sociales. En resumen, sólo si hay derechos hay ciudadanos. (Calderón, 1996)

Siguiendo la definición de Estado social de Derecho que ofrece García-Pelayo (en Njaim, 1996:144), según la cual: "...la función característica del Estado social es producir la integración dentro de la actual sociedad industrial, con su pluralidad de grupos e intereses antagónicos reduciendo los conflictos sociales a contactos sociales". El caso es que, desde los años 80 y, sobre todo en la década de los 90, los conflictos sociales en Latinoamérica se agravaron, principalmente con la

aplicación de medidas políticas y económicas que afectaron a los ciudadanos, porque la voz de estos ciudadanos no fue consultada para que se tomaran medidas tan drásticas como las llamadas “recetas del FMI”, que produjeron violentas reacciones en la población. Para Maestre (en Cansino y Ortiz Leroux, 1997:37) el ciudadano aparece como actor del espacio público por excelencia como lo es la sociedad civil y lo entiende como “... el lugar donde los ciudadanos, en condiciones de igualdad y libertad, cuestionan y enfrentan cualquier norma o decisión que no haya tenido su origen o rectificación en ellos mismos...”. Por ello, el rechazo a estas medidas, además de sus efectos en la economía doméstica de los ciudadanos, era también la expresión contra la violación de sus derechos.

Esto, como ya se mencionó, devino en apatía política, que en datos numéricos se reflejó en una creciente abstención a la hora de votar, (Ver anexo 6), además de protestas frecuentes contra los organismos públicos. Para estas mismas épocas tienen cada vez mayor presencia nuevos movimientos sociales que aparecen como canales de expresión más efectivos de la ciudadanía ante las deficiencias mostradas por los partidos políticos. En la medida que se profundizaba la crisis de los

partidos las posibilidades de llegar a acuerdos y sostenerlos entre los distintos actores políticos se hacía particularmente precaria, básicamente porque los ciudadanos culpaban a estas organizaciones de las dificultades que enfrentaban. En estos ambientes de fragilidad institucional, los partidos políticos no lograban presentar como creíbles las reformas institucionales propuestas, al tiempo que se fue generando un conjunto diversificado de nuevas agrupaciones políticas que retaban el monopolio partidista. “Al romperse la identificación entre partido, Estado y organización popular, se abrió un campo de posibilidades más diversas para el crecimiento de la sociedad civil”. (Gómez Calcaño, 1997: 23)

Toda esta transformación social y política también se fundamentó en una mayor conciencia ciudadana de sus derechos, producida por la propia dinámica social que maneja un gran cúmulo de información global y por el empuje de los mismos ciudadanos que reclaman, cada vez con mayor fuerza, sus derechos. Dicho proceso de transformación va acompañado del surgimiento y avance de un conjunto de organizaciones y tendencias que persiguen un cambio en la forma de hacer política, y que en cierta medida intentan llenar ese vacío y de alguna manera

canalizar las distintas demandas de una sociedad civil que, como sostiene Inés Pérez Suárez (1995), se halla cada vez más descreída y anémica; más aún si se asume la multiplicidad de problemas presentes hoy en día, en los cuales, según Fernando Rospligiosi (1995), los partidos políticos han tenido una gran responsabilidad.

Por ello la aparición de nuevos actores sociales son una valiosa alternativa para la sociedad civil ante el Estado, puesto que ellos cuentan con mayor credibilidad y, un aspecto muy importante, son vistos como elementos propios de esta sociedad civil, como sus aliados en su lucha por conquistar sus derechos, que como afirma Touraine (1994), es la lucha de los sujetos, en su cultura y en su libertad, contra la lógica dominadora de los sistemas.

2.1.2.- Alternativas a la falta de representatividad en Venezuela

El fortalecimiento de los movimientos sociales, que se inició en Latinoamérica a partir de los 80, tuvo su epicentro en Venezuela a raíz del llamado “Paquetazo”, durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, en 1989. Se trataba de un conjunto de medidas económicas orientadas a fortalecer la economía, pero que no tomaba en cuenta las consecuencias en la sociedad; aunque hay que tomar en cuenta lo que señala Lander (1995): La profundidad de las grietas en el imaginario del desarrollo se habían evidenciado dramáticamente a finales del gobierno de Jaime Lusinchi, amenazando la estabilidad social y política del país.

El “Paquetazo” o programa económico es presentado por el presidente Carlos Andrés Pérez como “un gigantesco esfuerzo, que demanda una voluntad firme y una disposición para la austeridad y el esfuerzo que algunos todavía no entienden a cabalidad. Es una transformación política y social, pero ante todo, es un cambio cultural profundo, en el cual los valores del esfuerzo, la producción, el trabajo, la solidaridad social, se coloquen en el primer lugar. Hay que desterrar el

facilismo, el consumismo y la idea de aquí no ha pasado nada, [...]. Es el gran viraje”. (Carlos Andrés Pérez citado por Kornblith, 1998: 121)

Fueron medidas impuestas a la población en las cuales había una inversión de las prioridades, por la que se privilegió la gestión de los equilibrios macroeconómicos por encima de los mecanismos de integración social (empleo, salud y educación); por ello, 11 días después del anuncio de las medidas económicas, entre los días 27 y 28 de febrero de 1989, tuvo lugar en las ciudades más importantes del país un sorpresivo y multiforme estallido social, conocido posteriormente como “el Caracazo”. La magnitud del acontecimiento estremeció a la sociedad venezolana e impactó a la opinión pública internacional. Dado el carácter simultáneo, extensivo, masivo y sorpresivo, las fuerzas policiales regulares se vieron superadas muy rápidamente por los acontecimientos, que se extendieron como un fuego arrasador por casi todo el país.

Se había profundizado la fractura que ya existía entre los entes políticos y la sociedad civil, se acentuó el desencanto por el Estado y los partidos políticos AD y COPEI, que han debido soportar el estigma de culpables de los problemas del país y a sus dirigentes, pues se consideró

que “las élites políticas nacionales redujeron la política a la actividad partidista”. (Álvarez, 1995: 91). A partir de allí se acentuó la crítica al sistema de partidos, surgió con fuerza la antipolítica y se abrió un gran espacio para los outsiders, que fue aprovechado por el coronel retirado Hugo Chávez, quien había intentado un golpe de Estado en 1992.

Paralelamente, surgen demandas desde diversos puntos de la sociedad civil venezolana con nuevas organizaciones que reclaman ante el Estado por diferentes causas, pero que también lo hacen con una acción positiva de trabajo, procurando un mayor bienestar para la población. En este contexto, una de las primeras organizaciones que surge es el Centro al Servicio de la Acción Popular (CESAP), que desde los años setenta tiene un sostenido trabajo en distintas esferas (campesinos, mujeres, vivienda). Su fundador, el sacerdote Armando Janssens, promovió, a mediados de los años noventa, la creación de Sinergia, como un espacio de articulación de la sociedad civil venezolana. Posteriormente, Elías Santana fundaría en 1980 la “Escuela de Vecinos de Venezuela”, cuya “misión es la educación ciudadana para la participación”. Así fueron apareciendo luego el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos

(PROVEA), el Comité de Familiares de las Víctimas del 27 de febrero (COFAVIC), así como redes de organizaciones como el Foro por la Vida y Red de Apoyo por la Justicia y la Paz.

Estas agrupaciones tenían acciones específicas, propias de la sociedad civil, con poca o ninguna participación en el debate político, hasta ese momento. Sin embargo, tuvieron una función importante en la creación de conciencia entre la población y su relación con el Estado. De acuerdo con el padre Janssens, “lo más significativo de este proceso es el cambio fundamental de mentalidad, ya que en décadas pasadas, el promedio de nuestra población percibía al Estado como propietario de la sociedad. Poco a poco estamos descubriendo, a través de este proceso, que la sociedad es propietaria del Estado”. (El Nacional, 28 de abril de 2002).

Pero dentro de un ambiente político, social y económicamente inestable, como lo fue la década de los 90 y el actual gobierno de Hugo Chávez, nuevas organizaciones, algunas con fundadores de los anteriores movimientos sociales, aparecieron y compiten con los partidos políticos como intermediarios entre el Estado y la sociedad civil. Entre estos

están: “Queremos Elegir” y “Foro Democrático”, el grupo “Roraima” y el “Centro de Divulgación del Conocimiento Económico” (CEDICE). Otros, sin partida de nacimiento como organizaciones, también han asumido la lucha política, sobre todo frente al proyecto político “chavista”, aumentando la conflictividad, pero también ganándose la confianza de un sector de la población. Los principales protagonistas de esta confrontación son los medios de comunicación, la Iglesia Católica y el movimiento estudiantil. Por su puesto, dentro de estas mismas organizaciones hay sectores que no comulgan con sus luchas y que se inscriben más bien como partidarios del movimiento bolivariano.

Políticamente hay una realidad muy visible en esta situación, y es que mientras los partidos políticos no logran, hasta el presente, aglutinar, de manera significativa, a los ciudadanos, estos nuevos actores sociales cuentan con una alta confianza de la población y, paulatinamente, se han fortalecido y cuentan con una cada vez mayor acentuación en el panorama político venezolano. Al contribuir con el debate público en Venezuela, algunas organizaciones de la sociedad civil están haciendo política y esa orientación, en muchos casos, tiene puntos de coincidencias y agendas comunes con agrupaciones e instituciones de

otras naciones. La misma apropiación del término sociedad civil y su uso en este contexto responde a un proceso en el cual “actores globales” han jugado un papel importante y que ha sido definido por Daniel Mato (2001) como producto de transformaciones sociales en tiempos de globalización.

Toda esta inestabilidad crea un panorama interesante. Si la partidización excesiva y asfixiante terminó cerrando los canales legítimos de participación social y reforzó una apatía participativa que se evidenció durante largos años, hoy se vive un proceso que va en sentido contrario, que apunta a un fortalecimiento de la sociedad civil, de sus instituciones y de una participación mayor de los ciudadanos en las decisiones del Estado, aunque todo ello está en proceso de transformación y se percibe un clima de inestabilidad y de expectación ante los cambios que ocurren en la democracia venezolana.

2.2.- Un nuevo actor masivo, los medios de comunicación

Realmente los medios de comunicación no constituyen un nuevo actor, pero sí tiene en los últimos tiempos una fuerte presencia en el debate político, sobre todo en Venezuela. Por un lado los partidos y los líderes políticos utilizan esta vía para llevar sus mensajes a los ciudadanos y a los electores; por otro lado, una gran cantidad de medios están tomando parte de la política, fijando posiciones, aún a riesgo de perder la objetividad. Marcelino Bisbal (2003) afirma que ahora la política es cuestión de comunicaciones masivas, y agrega que “son los medios el escenario que buscan los políticos y los gobernantes para escenificarse de forma comunicacional bajo los géneros y las reglas impuestas por la comunicación masiva”. (Bisbal, 2003: 126).

Tanto los políticos como los propios dueños de medios han dado una mayor valoración a la acción de la comunicación y los efectos o beneficios que pueden obtenerse, de allí que haya ahora una mayor utilización de esta vía para causar efectos en la opinión pública. “La lucha por lograr ser escuchado o visto no es un asunto periférico propio de los vaivenes sociales y políticos de las sociedades complejas; al

contrario, se trata de un aspecto central en ellas” (Peterson y Thörn, 1999). Actualmente la televisión y la radio y los periódicos son, esencialmente, la plaza o espacio público en los cuales los políticos hacen política, y por tanto los medios, que median entre la experiencia social y la sociedad, vienen a ser ámbitos desde donde se construye la legitimidad de los actores políticos y desde donde se articulan los debates sobre lo público. Es por ello que muchas estrategias políticas, en la actualidad, se hagan desde lo comunicacional, pasando a ser este aspecto central en las mismas y no un aspecto complementario. Con ello, esta dimensión no sólo es un recurso, sino el propio espacio desde donde se efectúa la acción política, la intervención en la esfera pública. “Los medios no son el único agente de socialización política, pero son los medios quienes llevan más eficaz y más rápidamente la información política a los hogares. Lo que ellos difunden y el modo en el que lo hacen influye en las creencias del público acerca de lo que es y de lo que debería ser la política”. (Álvarez, 1995: 86)

En el caso venezolano, la función de los medios tiene una particularidad, y es que han ocupado posiciones enfrentadas, unos a favor del gobierno y otros en contra. No es que esto no haya ocurrido

antes, el caso es que durante el gobierno de Chávez hay una radicalización y una lucha abierta de medios en el debate político. Dos hechos han contribuido a acentuar el enfrentamiento: Durante los sucesos del 11, 12 y 13 de abril de 2002 los canales privados de televisión venezolanos no transmitieron las protestas que se hacían a favor del retorno del presidente Chávez al poder. Este hecho ha sido denunciado reiteradamente por el mandatario nacional, acusándolos de participar en un complot para derrocarlo. Del otro lado, el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), por el fin de su concesión, elevó el número de protestas contra el gobierno, calificándose la medida como dictatorial.

En el caso del gobierno, se ha incrementado el uso de la comunicación como mecanismo de defensa del proyecto bolivariano. Por parte de los medios, “llamados de la oposición”, ya no son sólo medios, son parte de la actividad política, no sólo llevan la noticia, son muchas veces la noticia.

Como bien lo señala Sandro Macassi Lavander (2002):
Crecientemente los medios de comunicación sustituyen a la

comunicación política, constituyéndose ellos mismos en escenarios, en actores y en catalizadores de la comunicación política. Martín Barbero (1999), por su parte, afirma que no asistimos a la disolución de la política, sino que estamos en presencia de la reconfiguración de las mediaciones, en vista de que los medios de comunicación constituyen hoy espacios decisivos de reconocimiento social y esa mediación más que sustituir ha pasado a constituir, a hacer parte de la trama de los discursos y de la acción política misma.

No es el punto de esta investigación revelar si uno u otro sector tiene o no razón en esta disputa política. En todo caso, los medios deberían mantenerse imparciales y objetivos, aunque algunos consideren una utopía la objetividad periodística. Sí es aspecto principal en este trabajo descubrir si los medios de comunicación venezolanos actúan como canales de expresión política de la sociedad, ocupando espacios de los partidos políticos y si estas acciones se justifican o no en el país.

Ahora bien, los medios de comunicación operan en la primera etapa de los conflictos, pues son los primeros en visualizar o no las necesidades de los grupos sociales, en dar publicidad a las demandas

colectivas, o en dar voz y autoría social a los líderes que las representan. (Macassi, ob.cit.) Para un sector de la población venezolana, las acciones de los “medios de oposición” o “independientes” están debidamente justificadas, pues representan sus aspiraciones de cambio de gobierno, de allí que consideren correcto que el canal Globovisión tenga una programación completa en contra del gobierno de Hugo Chávez y que decenas de diarios mantengan una línea editorial dirigida a minar la popularidad del mandatario. Del otro lado sucede lo mismo, pues el proyecto político del presidente Chávez cuenta con un número significativo de medios, entre los que se cuentan diarios, televisoras y radios comunitarias, VTV, ANTV, Vive Televisión, Telesur, Radio Nacional de Venezuela, la agencia de noticias ABN y otros medios que igualmente son considerados por los seguidores del gobierno como mecanismos de representación política, lo que coloca el debate político fuera de sus instancias normales y lo traslada a los medios de comunicación social.

Una idea del valor que el gobierno da al uso de los medios puede observarse en las cadenas presidenciales. En el 2006 Hugo Chávez tuvo 182 participaciones de radio y televisión, con 119 horas hablando; en el 2007 fueron 164 y 92 horas; en el 2008 apareció 154 veces con 190

horas. Sumando todas sus cadenas, entre el 2 de febrero de 1999 y el 19 de diciembre de 2008 el presidente ha tenido 1.816 intervenciones con 1.179 horas hablando en radio y televisión, equivalente a 49 días con sus noches ininterrumpidos.

Un estudio realizado por el Observatorio Global de Medios entre el 13 al 24 noviembre de 2006, a propósito de las elecciones presidenciales de ese año, y que tomó como muestra periódicos, televisoras y radioemisoras para medir el equilibrio informativo en esos comicios mostró los siguientes resultados: En medio impresos el 79,03% de las informaciones era contra el candidato Hugo Chávez y sólo el 20,07% era a favor; en tanto que el candidato Manuel Rosales contó con el 94,3% a favor y el 5,07% en contra. En radio y televisión se reflejó lo siguiente: El 73,08% de los conductores y/o periodistas asumieron determinada posición. El 46,9% lo hizo en contra del candidato Hugo Chávez, 7,8% en contra del candidato Manuel Rosales.

Sobre la actuación de los medios “opositores” en Venezuela, la Sociedad Interamericana de Prensa ha avalado sus procedimientos, pues considera que la prensa debe mantenerse libre del control del gobierno, ya que, de lo contrario, pierde la independencia con la cual debe actuar. “El Gobierno de Chávez niega reiteradamente a los medios no

subordinados a su hegemonía el derecho de acceso a la información pública e impide a los periodistas independientes el trabajo en las fuentes y escenarios controlados por organismos del Estado”, dijo el vicepresidente regional de la SIP y editor del diario venezolano Correo del Caroní, David Natera, durante la asamblea de esta organización realizada el 30 de marzo de 2008.

Ciertamente, si los medios están circunscritos a la esfera de la sociedad civil, cumplen una función de expresión de los ciudadanos cuando reclaman ante el Estado por sus necesidades, aunque este Estado critique esta función. La mediación social de algunas organizaciones de la sociedad civil pasa también por una mediación mediática, afirma Andrés Cañizalez (2004), director de la revista Comunicación, del centro Gumilla. En la esfera de la sociedad civil se ubica normalmente el fenómeno de la opinión pública, entendida como la expresión pública de consenso y disenso con respecto a las instituciones, transmitida mediante la prensa, la radio, la televisión. Por lo demás, opinión pública y movimientos sociales caminan de la mano y se condicionan mutuamente. “Sin opinión pública, lo que más concretamente significa sin canales de transmisión de la opinión pública, que se vuelve pública precisamente

porque es transmitida al público, la esfera de la sociedad civil está destinada a perder su función y finalmente a desaparecer”. (Bobbio, 1994: 45)

Entonces, aunque el gobierno venezolano esté en contra de las funciones que actualmente realizan estos medios, debe tenerse en cuenta que los mismos cumplen una función dada por la misma ciudadanía, o al menos una parte de ella, y en este sentido es necesario que sean respetados. Igualmente, ha de tenerse en cuenta que estos medios han cumplido funciones críticas y de expresión ciudadana en lo que se refiere a demandas de solución de problemas comunitarios, de allí que estos ciudadanos tengan confianza en esta institución que, según una encuesta de Datanalisis realizada en 2005, está en un 70% de respaldo de la población.

Es por ello que la posición del gobierno en contra de estos medios es vista como atentados a la libertad de expresión y como un intento por distorsionar las funciones de comunicación que debe cumplir una prensa independiente del Estado. Antonio Pasquali afirma que es el Estado quien padece más esta situación, ya que se le exige, y con toda justicia,

un paradigma de objetividad, de la misma manera que se le niega el derecho de convertir al público en una masa controlada. A pesar de estas trabas, más fuertes que las que pesan sobre las industrias culturales, el Estado moderno no puede sustraerse de sus responsabilidades como comunicador, por lo que también está en la obligación de informar sobre sus actuaciones. Por lo tanto, sin un Estado que pueda garantizar verdaderos servicios públicos para la difusión de las diferentes opiniones, pero también sin un Estado que informe de manera objetiva y permanente, sobre todo en la toma de decisiones, no podría existir una verdadera opinión pública, y por lo tanto, una verdadera democracia. (Pasquali, 1990)

No se trata de justificar el papel que juegan algunos medios privados o estatales en la política venezolana, pues está claro que en ambos casos pecan en sus excesos noticiosos a favor o en contra de todo lo que signifique Hugo Chávez, y como dice Giovanni Sartori en su libro “Homo Videns” (1997), es útil distinguir entre subinformación y desinformación”, entendidas éstas como información incompleta y distorsión de la información que tienen objetivos precisos de manipular la opinión pública; por ello el pensador italiano destaca que el pueblo

soberano opina en función de cómo los medios le inducen a opinar. Igualmente Habermas (1981) señala: La prensa se hace manipulable en relación a su grado de comercialización, con lo cual se explica que dentro del manejo informativo hay intereses que sobrepasan las fronteras de la ética periodística y los derechos ciudadanos, aunque no se puede asegurar que esto ocurra en todos los casos y con todos los medios.

Aún así, lo adecuado es que los medios no estén al servicio del Estado en detrimento de la sociedad. Bobbio recuerda que la democracia representativa descansa en el principio de la “escenificación” de la política, es decir, del debate abierto: instituciones representativas y medios de comunicación social son elementos fundamentales para visualizar el debate público.

Sartori (1994), refiriéndose a los medios de comunicación y a la opinión pública, afirma que tiene opinión sobre la gestión de los asuntos públicos y, por lo tanto, sobre los asuntos de la ciudad política (...) un público interesado en la “cosa pública”. Como consecuencia de lo anterior, la opinión pública, pretende discutir y criticar los actos del poder público, por esta razón, la opinión pública es considerada como

una esfera distinta e independiente a la del gobierno, lo que posibilita la discusión de los asuntos del mismo.

Por ello es necesario y fundamental para la democracia que existan medios libres e independientes, que posibiliten la discusión política de manera abierta a la sociedad. Lo público, resumidamente, “se articula entre el interés común, el espacio ciudadano y la interacción comunicativa” (Rey en Martín-Barbero, 2001:76). Es, precisamente, este espacio y esta posibilidad de articulación de los medios con el Estado y con la sociedad civil la que permite, de un modo más efectivo a estos actores sociales, servir de canalizadores de demandas y de vías de representación de una sociedad que no confía en los naturales organismos de representación, como deberían ser los partidos políticos.